



**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD – ADRES**

RESOLUCIÓN NÚMERO 150200 DE 2025

(12 de noviembre 2025)

"Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición"

**LA DIRECTORA DE OTRAS PRESTACIONES (E) DE LA ADMINISTRADORA DE
LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD –
ADRES**

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos, 114 del Decreto Ley 019 de 2012 modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, en desarrollo el parágrafo del artículo 2.6.1.4.3.14 del Decreto 780 de 2016, numeral 1º y 5º del artículo 17 del Decreto 1429 de 2016 y el numeral 2º del artículo 6º de la Resolución 1012 de 2022 y,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

- 1.1** Que la Dirección de Otras Prestaciones de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES, mediante **Resolución No. 53902 del 26 de mayo del 2025**, impuso la obligación de pagar una suma líquida de dinero al señor(a) **DIEGO LEON GIRALDO FRANCO**, identificado (a) con CC **No. 71.751.678**, en calidad de propietario (a) del vehículo de placa **PUW47C** por valor de **QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$15.410.071,89)**, indicando que esta suma debe ser indexada durante el periodo comprendido entre la fecha de pago de la reclamación y la fecha de expedición de dicho acto administrativo, más los intereses que se causen a partir de su firmeza y hasta la fecha de pago, con ocasión a la reclamación generada por el accidente de tránsito ocurrido el día **2022-02-06**.
- 1.2** Que el día **27 de octubre de 2025** se notificó personalmente del contenido de la **Resolución No. 53902 del 26 de mayo del 2025**, al señor **DIEGO LEON GIRALDO FRANCO**, en cumplimiento del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.
- 1.3** Que el señor **DIEGO LEON GIRALDO FRANCO**, previamente identificado, interpuso recurso de reposición en contra de la **Resolución No. 53902 del 26 de mayo del 2025**, mediante radicado No. 20256306130112 del 04 de noviembre de 2025.
- 1.4** Que, de acuerdo con los antecedentes anteriormente expuestos y con fundamento en los documentos que obran en el expediente, se procederá a resolver el recurso en los siguientes términos:

2. PROCEDENCIA DEL RECURSO

Una vez analizado el recurso interpuesto por el señor **DIEGO LEON GIRALDO FRANCO** y confrontada la fecha de notificación se encuentra que, este reúne los requisitos legales para ser estudiado de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Con fundamento en la delegación de que trata el numeral 2º del artículo 6 de la Resolución 1012 del 20 de mayo de 2022, corresponde a la Dirección de Otras Prestaciones, la competencia para resolver el recurso de reposición interpuesto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 4 del acto administrativo recurrido.

3. DEL RECURSO INTERPUESTO

Esta Dependencia procede a estudiar los argumentos esbozados por el señor **DIEGO LEON GIRALDO FRANCO** en el escrito mediante el cual sustenta el recurso de reposición que nos ocupa, donde señala entre otros:

"(...) 1. Debido proceso administrativo El debido proceso es un derecho constitucional fundamental, regulado en el Artículo 29 Superior, aplicable a toda clase de actuaciones administrativas y judiciales, en procura de que los habitantes del territorio nacional puedan acceder a mecanismos justos, que permitan cumplir con los fines esenciales del Estado, entre ellos, la convivencia pacífica, la cual cobra gran relevancia en materia de tránsito. 2 Este derecho fundamental, para quienes tengan a su cargo el desarrollo de un proceso judicial o administrativo, implica la obligación de mantenerse al tanto de las modificaciones al marco jurídico que regula sus funciones, pues de lo contrario, su conducta puede acarrear la ejecución de actividades que no les han sido asignadas o su ejecución conforme con un proceso no determinado legalmente. Frente a este particular, resulta adecuado traer a colación el Artículo 6º Superior, en cuanto dispone que todo servidor público responde por infringir la Constitución y la ley y por la "omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones", en concordancia con el Artículo 121 del mismo texto, en el que se determina que aquellos pueden ejecutar únicamente las funciones que se determinen en la Constitución y en la ley. En tal virtud, el principio de legalidad es una restricción al ejercicio del poder público, en atención a la cual "las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos." 3 Por otro lado, desde la perspectiva de los ciudadanos inmersos en una actuación administrativa o judicial, el debido proceso constituye una garantía para el acceso a la administración de justicia, de tal forma que puedan conocer las decisiones que los afecten e intervenir, en términos de igualdad y transparencia, para procurar la protección de sus derechos e intereses legítimos. En este sentido, el debido proceso se concibe como un escudo protector frente a una posible actuación abusiva de las autoridades, cuando estas se desvíen, de manera injusta, de la regulación jurídica vigente. 4 La Corte Constitucional ha manifestado que el debido proceso comprende: ""a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley. c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los

medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso. d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables. e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo reconocimiento cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo. f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.”⁵ En lo concerniente al debido proceso administrativo, debe señalarse que se encuentra regulado en el Artículo 29 de la Constitución Política, en el cual se determina la aplicación del debido proceso en “toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”; así como en el Artículo 209 del mismo texto y en el numeral 1º del Artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, normas en las que se regula como un principio fundamental de la función administrativa. Frente a este particular, en la Sentencia C-980 de 2010, la Corte señaló que el debido proceso administrativo ha sido definido jurisprudencialmente como: “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”⁶. Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”⁷. En la misma providencia, se determinó que las garantías establecidas en virtud del debido proceso administrativo, de acuerdo a la jurisprudencia sentada por este alto Tribunal, son las siguientes: “(i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso.” Para las autoridades públicas, el debido proceso administrativo implica una limitación al ejercicio de sus funciones, puesto que en todo proceso, desde su inicio hasta su fin, deben obedecer de manera restrictiva a los parámetros procedimentales determinados en el marco jurídico vigente. Con lo anterior se pretende eliminar todo criterio subjetivo que pueda permear el desarrollo de los procesos administrativos y, a su vez, evitar la conducta de omisión, negligencia o descuido en que puedan incurrir los funcionarios relacionados en el proceso. Lo antes mencionado cobra especial importancia cuando se trata del proceso administrativo sancionador⁸, el cual constituye una facultad de las autoridades públicas para el cumplimiento de sus decisiones de carácter correctivo (dirigida a los particulares) o disciplinario (aplicada a los servidores públicos).⁹ Las decisiones correctivas están reguladas, en principio, con un fin preventivo para que los administrados se abstengan de incurrir en conductas que puedan, entre otras cosas, afectar la convivencia social, fin esencial del Estado. De ahí que el proceso administrativo sancionatorio, desde esta perspectiva, constituye un límite a las libertades individuales en aras de garantizar el orden público.¹⁰

2. Derecho de defensa y contradicción en el proceso administrativo Como se determinó anteriormente, el derecho

fundamental al debido proceso administrativo se descompone en diferentes garantías¹¹, una de ellas es el derecho de defensa y contradicción, consistente en el derecho reconocido a toda persona "de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como ejercitar los recursos que le otorga"¹² la ley. Doctrinariamente, se ha establecido que el derecho de defensa: "concreta la garantía de la participación de los interlocutores en el discurso jurisdiccional, sobre todo para ejercer sus facultades de presentar argumentaciones y pruebas. De este modo, el derecho de defensa garantiza la posibilidad de concurrir al proceso, hacerse parte en el mismo, defenderse, presentar alegatos y pruebas. Cabe decir que este derecho fundamental se concreta en dos derechos: en primer lugar el derecho de contradicción, y, en segundo lugar, el derecho a la defensa técnica."¹³ El derecho de defensa, puntualmente, se centra en la posibilidad de que el administrado conozca y tenga la posibilidad de hacer parte del procedimiento que lo involucra y, a partir de ahí, exponer su posición y debatir la de la entidad correspondiente por medio de los recursos y medios de control dispuestos para el efecto. Por su parte, el derecho de contradicción, tiene énfasis en el debate probatorio, implica la potestad de presentar pruebas, solicitarlas, "participar efectivamente en [su] producción" y en "exponer los argumentos en torno a lo que prueban los medios de prueba"¹⁴. En suma, esta garantía procesal consiste, primero, en la posibilidad de que el particular, involucrado en un procedimiento o proceso adelantado por la administración, pueda ser escuchado y debatir la posición de la entidad correspondiente; segundo, presentar pruebas, solicitar la práctica de las que se considere oportuno y, de ser pertinente, participar en su producción; tercero, controvertir, por medio de argumentos y pruebas, aquellas que contra él se alleguen; cuarto, la posibilidad de interponer los recursos de ley y, quinto, la potestad de ejercer los medios de control previstos por el legislador.¹⁵ Uno de los requisitos para poder acceder a esta garantía procesal es tener conocimiento de la actuación surtida por la administración, en razón de ello, el principio de publicidad y, el procedimiento de notificación que de él se desprende, constituye un presupuesto para su ejercicio. (...)"

En consecuencia, solicitó:

"(...)1. Revocar en su totalidad el Acto Administrativo No. 53902 de 2025, por haber sido expedido y notificado fuera del término legal, configurándose la caducidad de la facultad administrativa. 2. En subsidio, declarar la nulidad del acto por violación del debido proceso y del parágrafo del artículo 2.6.1.4.3.14 del Decreto Único 780 de 2016 (...)"

4. CONSIDERACIONES DE ESTA DIRECCIÓN

Sea del caso recordar, que por expresa disposición del artículo 48 de la Constitución Política, corresponde al Estado garantizar la seguridad social y la vida de sus ciudadanos. En este sentido, cuando las personas que sufran daños corporales causados en accidentes de tránsito ocurridos dentro del territorio nacional y sus respectivos beneficiarios cuando se produce el fallecimiento, tendrán derecho a los servicios y prestaciones establecidos en el artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que lo adicionen o modifiquen, bien sea con cargo a la entidad aseguradora que hubiere expedido el SOAT, respecto de los daños causados por el vehículo automotor asegurado y descrito en la carátula de la póliza, **o con cargo a la Subcuenta ECAT del entonces FOSYGA hoy ADRES, para las víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados o no identificados.**

Es así que, todos los establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y previsión social del sector salud, están obligados a prestar la atención médica en forma integral a las víctimas de accidentes de tránsito, considerando el grado de complejidad de la atención que requiera el accidentado y que una vez suministrada la atención médica por una clínica u hospital, éstos están facultados para cobrar directamente a la compañía aseguradora que expidió el SOAT - si el vehículo cumple con la obligación de estar amparado con la póliza de seguro obligatorio, por los costos de los servicios de salud prestados hasta por los montos de cobertura fijados por las disposiciones legales pertinentes y **al FOSYGA - Subcuenta ECAT, si el vehículo carece de póliza de seguro obligatorio SOAT, o no ha sido identificado o superados los topes en lo que faltase.**

La facultad del FOSYGA hoy la ADRES, según la cual se entiende subrogado para cobrar las atenciones referidas, procede en contra del propietario del vehículo que incumplió su obligación de adquirir el seguro obligatorio SOAT, de conformidad con el artículo 40 del Decreto 056 de 2015, compilado en el artículo 2.6.1,4.3.14 del Decreto 780 de 2016, vigente para accidentes ocurridos después del 3 de mayo de 2015, el cual señala:

"Repetición. podrá repetir el pago realizado a las víctimas accidentes de tránsito, de conformidad con lo previsto en el artículo 1668 del Código Civil, el Fosyga se entiende subrogado en los derechos de quien hubiere recibido cualquier suma de la Subcuenta ECAT de dicho Fondo por concepto de pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente Capítulo, con ocasión del incumplimiento del propietario del vehículo de la obligación de adquirir el SOAT. No obstante, la persona que conducía el vehículo no asegurado al momento del accidente será solidaria por todo concepto de responsabilidad que le asista al propietario del vehículo por cuenta del incumplimiento de la obligación de adquirir el SOAT. En estos casos, el Fosyga adelantará las acciones pertinentes contra el propietario del vehículo para la fecha del accidente, encaminadas a recuperar las sumas que haya pagado por los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente Capítulo y contra el conductor si lo estima pertinente". (Lo subrayado es fuera de texto).

Sobre el particular, es necesario reiterar, lo señalado en la **Resolución No. 53902 del 26 de mayo del 2025**, en el sentido de informar que, el cobro de la obligación endilgada tiene fundamento en el artículo 114 del Decreto Ley 019 de 2012 modificado por el artículo 106 del Decreto 2106 de 2019, el cual facultó al Ministerio de Salud y Protección Social, para ordenar, mediante acto administrativo, el cobro de los créditos a favor del entonces FOSYGA, hoy la ADRES, correspondiente a las reclamaciones reconocidas y pagadas por la Nación -FOSYGA, con ocasión de los daños corporales y/o indemnización por muerte y gastos funerarios, causados en accidentes de tránsito, como consecuencia del incumplimiento **de quien ostenta la obligación de contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT vigente.**

En conclusión, cuando en un accidente de tránsito se encuentre involucrado un vehículo que no cuente con Seguro Obligatorio de Tránsito vigente, los gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnización a los que haya lugar, por principio de inmediatez son asumidos por el Estado, con cargo a la **Subcuenta ECAT del entonces FOSYGA hoy ADRES**, para lo cual solo es necesario los siguientes elementos de acuerdo con la normatividad vigente:

- a) Existencia de un accidente de tránsito el cual se acredita con la declaración del médico de urgencia sobre el hecho
- b) No contar con la póliza SOAT
- c) Existencia de víctimas

Situación está que se configura a cabalidad en el presente asunto conforme a los documentos que obran en el expediente de reclamaciones y que demuestran la existencia del accidente de tránsito ocasionado el día **2022-02-06** y del cual el reconocimiento y pago por concepto de gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnización, se adelantó dentro de los términos y condiciones establecidas en el artículo 73 de la ley 1753 de 2015, dando como resultado que, al entonces FOSYGA hoy ADRES, pagara las reclamaciones generadas por el precitado accidente, contenida en el acto administrativo recurrido, es por ello que se adelantó el proceso de cobro en contra del señor **GIRALDO FRANCO**, propietario para la fecha del siniestro del vehículo automotor involucrado.

Esclarecido lo anterior, esta Dirección en aras de garantizar entre otros, los derechos al debido proceso, contradicción y a la defensa, resolverá el recurso impetrado en contra del acto administrativo que ordenó el cobro así:

Resulta oportuno precisar que, al ordenarse el cobro en la forma descrita en el acto administrativo recurrido, en modo alguno se está imponiendo una sanción, que se está atribuyendo a una responsabilidad objetiva, civil extracontractual o penal surgida a consecuencia del hecho de estar involucrado en el accidente de tránsito en calidad de guardián material o jurídico del vehículo, o por haber cometido una infracción de tránsito, contravención, u ocasionar un hecho de similar naturaleza, por el contrario, al dirigir el cobro de la obligación contra quien para la fecha de dicho evento figuraba ante el Estado como propietario del vehículo que causó las lesiones, se hace referencia a la omisión de un deber legal atribuida a quien incumpliendo tal deber de efectuar la transferencia de la propiedad a través del registro de traspaso ante el Organismo de Tránsito, permita la circulación de un vehículo que estando a su nombre, no cuente con una póliza de seguro obligatorio - SOAT, legal y vigente al momento de un accidente de tránsito.

De esta forma, el nexo causal existente entre el(a) propietario del vehículo, la ausencia de póliza de seguro SOAT legal y vigente al momento del accidente, y el hecho de que los gastos asistenciales o indemnizatorios derivados del mismo, hayan sido asumidos con recursos del entonces FOSYGA hoy la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, generan los presupuestos legales para el ejercicio del subrogado de derecho para repetir contra el titular del automotor por el valor de los gastos respectivos, **independientemente de otras responsabilidades derivadas del accidente como la responsabilidad penal.**

Se tiene que, para iniciar la actuación administrativa aquí adelantada no se ha considerado la naturaleza del accidente de tránsito ni la presunta responsabilidad de los terceros involucrados, pues se reitera, cuando en un accidente de tránsito se encuentre involucrado un vehículo que **no cuente con Seguro Obligatorio de Tránsito legal y vigente**, los gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnización a los que haya lugar, por principio de inmediatez son asumidos por el Estado, con cargo a la Subcuenta ECAT de la ADRES y solo son necesarios los siguientes elementos de acuerdo con la normatividad vigente: **1. Existencia de un accidente de tránsito el cual se acredita con la declaración del médico de urgencia sobre el hecho. 2. No contar con la póliza SOAT. 3. Existencia de víctimas.**

Como quiera, en lo que respecta al presente asunto, **la responsabilidad radica en el hecho de haberse puesto en circulación el automotor de placa PUW47C, sin una póliza SOAT legal y vigente**, contraviniendo lo dispuesto por el Decreto - Ley 1032 de 1991, el cual en su artículo primero ordena lo siguiente:

"OBLIGATORIEDAD. Para transitar por el territorio nacional todo vehículo automotor debe estar amparado por un seguro obligatorio vigente que cubra los daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito..."

Continuación "Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición"

Vehículo de placa **PUW47C** que, para la fecha de los hechos, esto es, el día, **2022-02-06**, no contaba con el Seguro Obligatorio de Tránsito- SOAT, como se demuestra en la consulta elevada en la plataforma de Fasecolda, en la cual se relacionan las pólizas expedidas, así:

Numero Poliza	Fecha Inicio	Fecha Vencimiento	Fecha Expedicion	Codigo asegurado ra	Tipo Identificacion	Numero Identificacion	Nombres Apellidos	Placa
AT1324412314402	26/05/2016	25/05/2017	25/05/2016	AT1324	CC	1024562220	CUBILLOS BUITRAGO JOHN ALEXANDER	FSJ52E
AT150134430034	15/07/2017	14/07/2018	14/07/2017	AT1501	CC	1024562220	CUBILLOS BUITRAGO JOHN ALEXANDER	FSJ52E
AT1324414290069	17/07/2018	16/07/2019	16/07/2018	AT1324	CC	1024562220	CUBILLOS BUITRAGO JOHN ALEXANDER	FSJ52E
AT132914485300016050	20/07/2019	19/07/2020	19/07/2019	AT1329	CC	1024562220	CUBILLOS BUITRAGO JOHN ALEXANDER	FSJ52E
AT13064035568800	20/07/2020	20/07/2021	18/07/2020	AT1306	CC	1024562220	CUBILLOS BUITRAGO JHON	FSJ52E

4.1 DE LA CADUCIDAD

Es menester tener en cuenta lo establecido por el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011, el cual indica que las entidades públicas deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con la mentada Ley. Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes.

En virtud de lo expuesto, la Ley 1066 de 2006 señaló que las entidades públicas cuyas actividades o funciones impliquen el recaudo de caudales públicos tienen jurisdicción coactiva y deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor; por lo tanto es deber de las entidades públicas, establecer mediante acto administrativo de carácter general, el reglamento interno para el recaudo de cartera, en el cual se establezcan reglas claras para la celebración de acuerdos de pago de las obligaciones existentes a favor de la entidad.

Es así, que en aras de ejercer la acción de repetición por parte de la ADRES, el artículo 106 inciso 4 del Decreto 2106 de 2019 señaló:

"La ADRES deberá expedir, dentro de los dos (2) años siguientes al pago de la indemnización o al pago de la EPS del servicio en salud y transporte, un acto administrativo que ordenará el cobro al propietario y/o conductor del vehículo no asegurado por el SOAT y podrá hacerlo efectivo a través de la jurisdicción coactiva, adelantando el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Contra este acto administrativo únicamente procederá el recurso de reposición."

Conforme lo anterior, una vez la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES ha pagado los servicios de salud, indemnizaciones y gastos a las víctimas de accidentes de tránsito, deberá expedir un acto administrativo que ordene el respectivo reembolso por parte del propietario o conductor del vehículo que inobservó el deber de adquirir el SOAT.

Será el mencionado acto administrativo que ordena el reembolso a favor de la ADRES, en el cual consta una obligación clara, expresa y exigible (artículo 99, núm.1, CPACA) el título ejecutivo que habilitará el cobro coactivo contra el propietario del vehículo o su conductor.

En atención a lo dicho, se entiende que el plazo de caducidad de la acción de repetición será de dos (2) años conforme a lo previsto en el artículo 164-2 (i) del CPACA y lo dispuesto en el artículo 106 inciso 4 del Decreto 2106 de 2019. Término que empezará a correr desde el momento en que nace el derecho de recobro en cabeza de la ADRES, lo cual ocurre cuando se efectúa el último giro de las reclamaciones reconocidas y pagadas por concepto de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos que correspondan con ocasión del hecho dañoso. Esto último en aplicación de la misma regla contenida en la parte final del articulado mencionado y porque el afectado no puede quedar indefinidamente expuesto a procedimientos judiciales o administrativos por parte del Estado.

Lo anterior, guarda relación respecto a lo indicado por el Honorable consejo de estado en el cual manifestó, que:

"4.2.2.1. Caducidad para expedir el acto administrativo que ordena el reembolso a favor del FOSYGA

Una vez el FOSYGA (subcuenta ECAT) ha pagado los servicios de salud, indemnizaciones y gastos a las víctimas de accidentes de tránsito, deberá expedir un acto administrativo que ordene el respectivo reembolso por parte del propietario o conductor del vehículo que inobservó el deber de adquirir el SOAT.

Dado que la ley no señala expresamente el plazo para la expedición de dicho acto administrativo, la Sala estima que dicho plazo no podría superar el que se tendría para interponer la acción judicial de repetición contra el particular que con su conducta le causó un daño, en los términos de los artículos 140 y 164 (numeral 2, lit. i) del CPACA, es decir, dos (2) años desde el momento de la exigibilidad de la respectiva obligación, hecho este que para el caso del FOSYGA ocurre desde que se hace el pago, tal como se explicó en el punto 4.1. de este concepto.

No sobra advertir que, de conformidad con los artículos 29 de la Constitución Política y 3 del CPACA, el acto administrativo que declara la existencia de la obligación de reembolso por parte del propietario del vehículo o su conductor no puede expedirse de plano. Por el contrario, exige respetar el debido proceso administrativo, que comporta la citación previa del afectado y la aplicación del procedimiento administrativo previsto en la primera parte del CPACA, inclusive en relación con los recursos que cabrían contra la decisión final.

Será el mencionado acto administrativo que ordena el reembolso a favor del FOSYGA, en el cual consta una obligación clara, expresa y exigible (artículo 99, núm.1, CPACA) el título ejecutivo que habilitará el cobro coactivo contra el propietario del vehículo o su conductor."

Expuesto lo anterior, para el caso sub examine, se evidencia que la **Resolución No. 53902 del 26 de mayo del 2025**, que impone el pago de la obligación en contra del señor **DIEGO LEON GIRALDO FRANCO**, fue expedida dentro del plazo de los dos (2) años con los que contaba la administración para hacerlo efectivo a través de la jurisdicción coactiva. Por lo tanto, se entiende que la ADRES estaba en término para expedir el acto administrativo, dado que la fecha de giro de las reclamaciones reconocidas y pagadas por la entidad, con ocasión al accidente de tránsito en el que se vio involucrado el vehículo automotor de placa **PUW47C** fue el día **2024-08-09**, y la expedición del título ejecutivo ocurrió el **26/05/2025**. De esta manera, la

Continuación "Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición"

administración estaba facultada para iniciar la actuación administrativa en contra del señor **GIRALDO FRANCO**, como se detalla a continuación:

Numero Reclamación	Fecha de giro	Fecha de accidente	Valor unitario indexado
2157294	2024-11-27	2022-02-06	\$74.196,99
2163065	2024-08-09	2022-02-06	\$67.189,19
2163959	2024-08-09	2022-02-06	\$15.136.807,41
2164620	2024-08-09	2022-02-06	\$57.397,27
2164957	2024-08-09	2022-02-06	\$74.481,03
		Total	\$15.410.071,89

En consecuencia, queda esclarecido que, si bien el accidente de tránsito ocurrió el día **2022-02-06**, durante los años siguientes se ha efectuado el trámite propio por parte de la entidad reclamante para el reconocimiento y pago de la reclamación y posterior a ello, los días **2024-08-09**, se efectuaron los giros de la obligación presentada por aquella como se indicó anteriormente, dando como resultado que la Entidad estando dentro del término legal ordenado en el artículo 106 del Decreto 2061 de 2019 iniciara el respectivo cobro en contra del recurrente es decir el título ejecutivo que nos convoca y que data del año 2025, por lo que no se repondrá lo contenido en la Resolución No. 53902 del 26 de mayo del 2025.

4.2 TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO PUW47C

Teniendo en cuenta quien figure ante el Estado como **propietario** de un vehículo, es el(a) persona responsable de cumplir con las obligaciones que se deriven de tal derecho, se procedió a verificar la plataforma del Registro Nacional de Tránsito- RUNT arrojando a la fecha de la consulta (2022-02-06) como propietario del automotor de placas **PUW47C**, al señor **DIEGO LEON GIRALDO FRANCO**, siendo por lo tanto procedente el proceso de cobro adelantado en su contra, razón por la cual no es posible acceder a sus pretensiones; se relaciona a continuación la consulta precitada así:

DOCUMENTO	TIPO_DOCUMENTO	PROPIETARIO	ESTADO_PROPIETARIO	ESTADO_VEHICULO	FECHA_INICIO_O_PROPIEDAD	FECHA_FINALIDAD_PROPIEDAD	PLACA
71751678	Cédula Ciudadanía	DIEGO LEON GIRALDO FRANCO	ACTIVO	ACTIVO	25/02/2012		PUW47C

En este orden de ideas, mientras no se evidencie lo contrario, quien para la fecha del accidente figure en el respectivo **CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN expedido por la autoridad de tránsito competente y/o presente CERTIFICACIÓN DE PÓLIZA SOAT VIGENTE** para el momento en que ocurrieron los hechos; responderá como ya se dijo por las obligaciones atribuidas, **ya que son los únicos documentos eximentes de la responsabilidad administrativa generada con ocasión del citado accidente.**

4.3 PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE DEBIDO PROCESO, LEGALIDAD, DEFENSA Y CONTRADICCIÓN

Considera el recurrente vulnerados sus derechos en tanto que ADRES "no fui notificado de ninguna actuación administrativa previa al acto de cobro, esto acorde a lo indicado".

Frente a lo mencionado por el recurrente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, el día 27 de octubre de 2025 se notificó por aviso al señor DIEGO LEON GIRALDO FRANCO del contenido de la Resolución No. 53902 del 26 de mayo del 2025.

La efectividad de dicha notificación se encuentra corroborada no solo por el acta de notificación correspondiente, sino también por la interposición del recurso que motiva el presente análisis, lo cual constituye una manifestación clara e inequívoca del conocimiento del acto administrativo por parte del recurrente. En efecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que la presentación de recursos constituye prueba suficiente del conocimiento del contenido del acto notificado, lo que refuerza el cumplimiento del principio de publicidad y garantiza el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y desarrollado en la Ley 1437 de 2011.

Así las cosas, se tiene por demostrado que el acto administrativo fue debidamente notificado dentro de los términos legales, respetando los derechos de defensa y contradicción del administrado.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, no existe prueba ni razón jurídica que permita acceder a las pretensiones de la recurrente consistentes en rectificar la información y exonerarla del pago de la obligación, razón por la que se confirma la **Resolución No. 53902 del 26 de mayo del 2025** en todas y cada una de sus partes.

Como se puede observar, la actuación administrativa en el presente asunto se está desarrollando en cumplimiento del principio de legalidad y con el pleno respeto de los derechos fundamentales y constitucionales al debido proceso y derecho a la defensa, los cuales se han visto plenamente ejercitados con la interposición del recurso de reposición objeto del presente pronunciamiento.

En virtud de lo anteriormente expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la **Resolución No. 53902 del 26 de mayo del 2025**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al señor **DIEGO LEON GIRALDO FRANCO** identificado (a) con CC No. **71.751.678**, el contenido de la presente resolución, conforme lo establecen los artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Destinatario	Dirección física y/o electrónica	Ciudad
DIEGO LEON GIRALDO FRANCO	diegogiraldo0214@icloud.com	MEDELLIN/ANTIOQUIA

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud y a la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la ADRES, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente decisión a la Oficina Asesora Jurídica – Cobro Coactivo - para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

Continuación "Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición"

ARTÍCULO QUINTO: Advertir que contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá, D.C., a los (12) días del mes de noviembre de 2025.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



Firmado Digitalmente por
Yasmín Escamilla B.
Directora (E) de Otras Prestaciones

YASMÍN ESCAMILLA B.

Directora (E) de Otras Prestaciones
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS) – ADRES

Revisó: Rafael Enrique Roa - Abogado Contratista 
Elaboró: Yuly Paola Prieto Rodríguez - Contratista
Expediente: 20234200360119056E